



PODER LEGISLATIVO PROVINCIA DE CORDOBA



Por favor, solo imprima este documento si es absolutamente necesario.

Deán Funes 94 Tel: 0351-4203400

VERSIÓN TAQUÍGRAFICA

6º REUNIÓN

4º SESIÓN ORDINARIA

19 de febrero de 2014

Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba.

ZEUS PLATAFORMA
LEGISLATIVA UNIFICADA

Poder Legislativo de la Provincia Córdoba.



—En la ciudad de Córdoba, a 19 días del mes de febrero de 2014, siendo la hora 17 y 24:

-1-

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente (González).- Con la presencia de 63 señores legisladores, declaro abierta la 4º sesión ordinaria del 136º período legislativo.

Invito al señor legislador Carlos Felpeto a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.

—Puestos de pie los señores legisladores y público, el señor legislador Felpeto procede a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2-

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

Sr. Presidente (González).- Esta Presidencia pone en consideración del Cuerpo la versión taquigráfica de la sesión anterior.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

—Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.

-3-

ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente (González).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por contar cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las netbooks. Asimismo, el legislador que así lo desee puede solicitar la inclusión de coautores o el giro a otras comisiones de los respectivos proyectos.



Tiene la palabra la señora legisladora Matar.

Sra. Matar.- Señor presidente: solicito que en el proyecto 13423/L/14 se incluya como coautor al legislador Pretto.

Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.

Tiene la palabra la señora legisladora Rista.

Sra. Rista.- Señor presidente: solicito que el proyecto de resolución 13019/L/13 pase a la Comisión de Asuntos Ecológicos.

Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.

Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría la nota 13440/14, a la que damos ingreso, elevada por el legislador Juan Manuel Cid, por la cual presenta su renuncia como miembro del Consejo de la Magistratura, que será leída a continuación.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

Córdoba, 18 de febrero de 2014

Sra. Presidenta de la Legislatura de la
Provincia de Córdoba

Cra. Alicia Pregno

S. / D.

De mi consideración:

Me dirijo a usted, y por su digno intermedio a todo el Cuerpo legislativo, a fin de elevar mi renuncia al cargo de miembro titular del Consejo de la Magistratura con el que este Honorable Cuerpo me honrara el día 22 de febrero de 2012.

Motiva este pedido la postulación a miembro titular del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios que me ofrecieran los legisladores de mi bloque.

Si bien no existe una expresa incompatibilidad legal ni constitucional de ocupar ambos cargos, considero que no es prudente ser miembro titular y representante de la Legislatura en el organismo que evalúa a quienes se postulan a jueces y, a la vez, en caso que se apruebe mi integración al Jury, cumplir funciones en el ente encargado de juzgarlos y, eventualmente, destituirlos.

Es por ello que solicito al Pleno que acepte esta renuncia indeclinable que pongo a consideración.

Por la presente me gustaría dejar mi expreso agradecimiento a todos los integrantes del Consejo de la Magistratura, personas de bien con quienes tuve el honor de compartir jornadas de trabajo, quienes merecen mi más profundo respeto.

Sin más, saludo atentamente.

Juan Manuel Cid

Legislador provincial

Sr. Presidente (González).- En consideración la nota de renuncia presentada por el legislador Juan Manuel Cid.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.

Sr. Busso.- Señor presidente: la Ley 8.802, que crea el Consejo de la Magistratura, dispone que este importante ente colectivo donde están representados distintos estamentos del quehacer jurídico y académico, y que tiene a cargo la evaluación de quienes se postulan para integrar el Poder Judicial, debe ser integrado, entre otras representaciones, por un miembro de esta Legislatura.

Sabemos que la selección de jueces por medio de un ente como el Consejo, que evalúa la idoneidad técnica de los futuros magistrados, hace a la garantía e independencia del Poder Judicial. Creemos, señor presidente, que aunque la ley no lo diga es preferible que quienes formen parte de este órgano imparcial de evaluación técnica ostenten el título de abogado, o al menos tengan una real vinculación con lo jurídico.

Ante la renuncia recientemente aceptada del doctor Juan Manuel Cid como representante de esta Legislatura en este órgano, venimos a proponer a la joven abogada María Laura Labat para que represente al Poder Legislativo por ante el Consejo de la Magistratura.

La compañera legisladora Labat está vinculada a esta Cámara desde hace algún tiempo, primero como asesora legislativa y ahora como legisladora, al haber integrado las listas de Unión por Córdoba en representación de la Juventud Peronista.

Laura se recibió de abogada en el año 2008, tuvo y tiene militancia política y social en su localidad, Hernando, y en su departamento, Tercero Arriba. Actualmente, integra como legisladora las llamadas comisiones jurídicas, es decir, las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General. También es miembro del Consejo Provincial de la Mujer, entre otros ámbitos de trabajo político y parlamentario.

Señor presidente, señores legisladores, creemos que Laura Labat está cabalmente capacitada para ocupar y honrar el cargo para el que la estamos proponiendo y como sabemos –porque ha dado muestras a lo largo de su militancia y, sobre todo, cuando ha encarado tareas parlamentarias en esta gestión– que se va a desempeñar con fervor y suma responsabilidad, es que solicitamos a nuestros pares que nos acompañen con el voto positivo en esta designación.

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción del legislador Busso para designar como miembro titular del Consejo de la Magistratura a la legisladora Laura Labat.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.

Se realizarán las comunicaciones pertinentes.

Sr. Presidente (González).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra el legislador Sergio Busso.

Sr. Busso.- Señor presidente, solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 42, 77 y 78 del Orden del Día sean girados al archivo.

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción del legislador Busso de enviar a archivo los proyectos correspondientes a los puntos 42, 77 y 78 del Orden del Día.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

—Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.

Se envían a archivo los proyectos correspondientes a los puntos 42, 77 y 78 del Orden del Día.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Busso.

Sr. Busso.- Señor presidente, solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 1 al 7 y 23 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 6º sesión ordinaria.

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con preferencia para la 6º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1 al 7 y 23 del Orden del Día.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

—Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.

Se incorporan al Orden del Día de la 6º sesión ordinaria.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Busso.

Sr. Busso.- Señor presidente, solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 8 al 22, 24 al 41, 43 al 76 y 79 al 130 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 7º sesión ordinaria.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con preferencia para la 7º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 8 al 22, 24 al 41, 43 al 76 y 79 al 130 del Orden del Día.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.

Se incorporan al Orden del Día de la 7º sesión ordinaria.

Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a los asuntos ingresados fuera de término que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

Proyectos de declaración: 13418, 13419, 13422, 13423, 13430, 13432, 13441 y 13442/L/14.

Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

Expte: 13428/E/14, proyecto de ley, estableciendo presupuestos mínimos establecidos en la Ley nacional 25.675, de Ambiente.

Sr. Presidente (González).- Se gira a las Comisiones de Asuntos Institucionales, de Asuntos Ecológicos y de Agricultura.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

Expte. 13429/E/14, proyecto de ley, estableciendo el Programa Control Ciudadano de la Policía de la Provincia de Córdoba.

Sr. Presidente (González).- Se gira a la Comisión de Legislación General y de Asuntos Constitucionales.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

Despacho de las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización, dictaminando acerca del expediente 13299/E/14, proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo modificando e incorporando artículos a la Ley 7854, Orgánica de Fiscalía de Estado.

Sr. Presidente (González).- Queda reservado en Secretaría.

Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 13299/E/14, el mismo cuenta con despacho de comisión y se leerá a continuación la nota respectiva.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):



Córdoba, 19 de febrero de 2014.

Señora Presidenta de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba

Cra. Alicia Pregno

S. / D.

De mi mayor consideración:

Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento sobre tablas en la sesión ordinaria del día de la fecha del expediente 13299/E/14, proyecto de ley modificando e incorporando artículos a la Ley 7854 –Orgánica de Fiscalía de Estado–, referidos a la estructura, integración y funciones, y creando la Oficina de Investigaciones Administrativas y la Escuela de Abogados del Estado.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Sergio Busso

Legislador provincial

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas que acaba de ser leída.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.

Tiene la palabra el señor legislador Cid.

Sr. Cid.- Señor presidente: se encuentra bajo tratamiento el proyecto 13299/E/14, de modificación de la Ley 7854 –Orgánica de Fiscalía de Estado–, reformulando su



estructura, integración y funciones, creando la Oficina de Investigaciones Administrativas y la Escuela de Abogados del Estado.

El presente proyecto, señor presidente, prevé la modificación de la estructura de la Fiscalía de Estado de la Provincia de Córdoba debido al incremento del flujo de tareas que se ha producido en ésta, proveniente de las áreas centralizadas y descentralizadas, así como de las agencias, entes autárquicos y sociedades del Estado. Esto ha generado la necesidad de dotar a la Fiscalía de Estado de más y mejores herramientas para resolver, de manera más eficiente y con mayor idoneidad, el problema que surge a partir de este mayor volumen de tareas.

Es por ello que se promueve la creación de una Fiscalía de Estado Adjunta –de tal modo, las Fiscalías serán dos–, en orden a dar respuesta a las necesidades que impone la realidad y a cumplir con los objetivos que se desprenden del artículo 150 de la Constitución de la Provincia de Córdoba, que establece que éste es el órgano de control de la legalidad administrativa del Estado, así como de la defensa del patrimonio de la Provincia.

Con estos objetivos y también con el afán de controlar al Poder Ejecutivo –siendo estas dependencias, asimismo, asesoras jurídicos del Gobierno–, se promueve la creación de la Fiscalía de Estado Adjunta. A su vez –por medio del inciso a) del artículo 2º de la Ley Orgánica de Fiscalía de Estado–, se da origen a la Dirección General Legal y Técnica, que tendrá a su cargo, de manera prioritaria y excluyente, la redacción de las normas dictadas por el Poder Ejecutivo de la Provincia.

Asimismo, para que la modificación introducida y la incorporación de estas figuras sean coherentes en su redacción, se modifican los artículos 2º, 18, 18 bis y 18 quater. Por su parte, se impulsa la modificación de la Ley Orgánica de Fiscalía de Estado incorporando, con rango de ley, la Oficina de Investigaciones Administrativas –figura que fuera creada a través del Decreto 624, del 20 de mayo de 2013–, que tendrá como responsable a un funcionario, designado por el Poder Ejecutivo, que surgirá a propuesta del Fiscal de Estado, y llevará adelante las investigaciones administrativas en todas las dependencias centralizadas, descentralizadas, entes autárquicos, sociedades y agencias del Estado, para generar de esta manera no sólo una mayor seguridad jurídica y una profesionalización y eficiencia de la tarea, sino también una uniformidad de criterios en aquellas tareas que hasta la actualidad se desarrollaban de manera similar en las distintas áreas de gobierno pero que ante iguales hechos pudieran serles aplicables diferentes criterios al momento de evaluar determinada actitud.

Por eso se crea esta oficina que actuará a pedido de cada uno de los responsables de las áreas centralizadas, descentralizadas, autárquicas, sociedades del Estado, etcétera, pero que también podrá funcionar de oficio cuando lo requiera el Fiscal de Estado, y aunque el jefe del área considere que no es necesario llevar adelante una investigación administrativa esta oficina lo puede hacer de oficio –como dije- a requerimiento del Fiscal de Estado.

Finalmente, se crea la Escuela para Abogados del Estado, algo muy importante porque para nuestro Gobierno la educación siempre fue sinónimo del nuevo significado de Justicia social, y ahora lo estamos poniendo en práctica dentro del propio Estado de la Provincia de Córdoba. Esto va a dotar de una mayor calidad

técnica y profesional a los abogados que forman parte del Estado provincial permitiendo la formación de cuadros profesionales dentro del Estado. Pero, a su vez, tiene otras previsiones como, por ejemplo, la posibilidad de formar y capacitar a aquellos profesionales de la matrícula que se dediquen a asesorar a ciudadanos, consumidores o usuarios; también tendrá la posibilidad de concentrar la necesidad de formación de profesionales de todos los organismos del Estado y evaluarlos. En el caso de que la escuela pueda evacuar la necesidad de capacitación y formación que tenga ese profesional lo hará dentro de esta escuela; y en caso de que la necesidad del profesional excediera la posibilidad de formación que pueda darle esta escuela, se le otorgará la posibilidad de ser capacitado en otro organismo que no sea dicha escuela como puede ser una universidad o instituto, público o privado, nacional o internacional.

Por último, le otorga la posibilidad de firmar convenios con universidades u otros organismos que tengan que ver con la educación para poder enriquecer la escuela de formación de abogados del Estado y dotarla de mejores y mayores herramientas para cumplir con su finalidad.

Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito la aprobación del proyecto en tratamiento.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Leiva.

Sra. Leiva.- Señor presidente: como efectivamente manifestó el legislador Cid, este proyecto tiene como finalidad la creación de Fiscalías Adjuntas, una de las cuales ya fue tratada en este recinto, la Fiscalía de Estado Adjunta del Sur, y en cuya oportunidad no acompañamos.

Una de las funciones primordiales del Fiscal de Estado –como también lo dijera el legislador Cid-, conforme a la Ley 7854, es el control de la legalidad de los actos administrativos del Estado, es la defensa del patrimonio de la Provincia y es el órgano exclusivo de asesoramiento del Gobierno de la Provincia.

Hoy veía en el diario una manifestación de uno de mis compañeros, el legislador Fonseca, haciendo referencia a la deuda pública de la Provincia, al refinanciamiento de la obra pública que está haciendo el Gobierno de 309 millones de pesos para este año, al pasivo existente en Salud, de 530 millones de pesos, al pasivo existente en Educación de 750 millones de pesos, al Gasto en dos años de 900 millones de pesos en publicidad. ¿Escucharon bien? Una de las funciones fundamentales del Fiscal de Estado es preservar el patrimonio de la Provincia y asesorar jurídicamente al Gobierno de la Provincia.

Si con este Fiscal de Estado, o con los fiscales de Estado que ha tenido este Gobierno, hemos logrado tamañas irregularidades en la administración del patrimonio de nuestra Provincia, no quiero ni pensar lo que pueden hacer con dos fiscales adjuntos más; no quiero ni pensarlo, si uno sólo bastó para semejante destrozo en la administración del patrimonio de nuestra Provincia no quiero ni pensar en la designación de dos más.

Tiene otras funciones: dictamina en las contrataciones de obras, de bienes, de servicios. Pues bien, ¿quién lo asesoró en la renovación del contrato con Aguas Cordobesas? Un contrato extremadamente oneroso para la Provincia. Repito, ¿quién lo asesoró? Tengo terror por la designación de dos fiscales más, si con uno el daño es irreparable. Van por más, señor presidente, pero a ustedes también les basta ese solito, los otros dos están pintados, cómo estarán pintados que la única finalidad que tiene este proyecto es la creación de conchabos políticos y ¿saben por qué? Aparte de ser los delegados por una cuestión legal, sustitutos legales con las funciones del Fiscal de Estado de la Provincia, entre las funciones que se prevé en el proyecto en tratamiento, artículo 18) quater, le han puesto: planificar y supervisar el trabajo de los abogados, asistir al Fiscal de Estado, convocar a reuniones plenarias a los abogados, organizar el registro de dictamen y su publicidad, organizar la biblioteca jurídica, analizar y estudiar la legislación vigente. Iguales y exactas funciones que por la misma ley que hoy están modificando le corresponde al Director General de Asuntos Jurídicos.

El Director General de Asuntos Jurídicos de la Provincia de Córdoba, dependiente del Fiscal de Estado, tiene idénticas funciones que ustedes hoy le están asignando a los fiscales adjuntos, lo único que han hecho es “cortar”, con este ingenio o esta facilidad que tienen hoy con las computadoras: cortaron y sacaron, cuando dijeron: “¿qué vamos a hacer con estos fiscales adjuntos? Y, en verdad no los necesitamos, para hacer el desastre que hemos hecho en esta Provincia lo tenemos al Fiscal de Estado, ¿Y qué hacemos?, bueno, le demos algunas funciones: biblioteca, reuniones con los abogados, saquemos de acá y pongamos allá”.

Esos son los fiscales adjuntos que van a nombrar hoy, uno de los cuales ya está nombrado: Fiscal de Estado Adjunto del Sur.

Acá me está diciendo el legislador Birri que es un “ñoqui”. Exactamente, coincido totalmente con el legislador.

Continúa el proyecto con la creación de la Oficina de Investigación Administrativa. Ayer, al inicio de la reunión de comisión, le pregunté al legislador Cid: “en esta Oficina de Investigación Administrativa hay algo que no entiendo, ¿no tiene las mismas funciones que la Oficina Anticorrupción?, “ah, no, no tiene las mismas funciones”. “Pero, ¿qué pasó con esa oficina?”, “a eso no lo puedo contestar porque no está en el temario”. “Bueno, pero ¿hay alguien nombrado?”, “no lo puedo contestar porque no está en el temario”.

A continuación, se puso a leer las funciones de esta Oficina Anticorrupción, oficina que fue creada por la Ley del Nuevo Estado del actual Gobernador, que él llamaba “modernización del Estado”, número 8835, que pretendía promover y asegurar la participación en los controles de los ciudadanos. Pero escuchen esto más gracioso todavía: entre las obligaciones que el Estado tiene –porque esta legislación está vigente-, está la de garantizar la calidad en la prestación de los servicios que le corresponde prestar o que tiene bajo su control. ¿Qué pasó? Hemos tenido un diciembre y un enero desastrosos, sin agua y sin luz. ¿Dónde está la calidad en la prestación de los servicios?

Pero fueron más allá. En otro inciso referido al Estatuto del Ciudadano –así fue llamado en la Ley de Modernización o del Nuevo Estado, que nos hizo creer en un



paraíso, en la posibilidad de un Estado con seguridad jurídica, con seguridad para nuestros ciudadanos- prevé que toda persona que habite esta Provincia tiene derecho a tener la prestación de servicios públicos de calidad aptos para satisfacer sus necesidades. Vuelvo a lo mismo, ¿qué pasó?, ¿se olvidaron de esa ley que buscaba la verdad real, que buscaba la prestación de servicios con calidad, que buscaba la participación de los ciudadanos en la prestación de esos servicios, en los contratos celebrados por el Estado, el control del ciudadano? ¡Qué letra muerta!

Esa misma ley es la que creó la Oficina Anticorrupción, oficina encargada de prevenir e investigar los actos de corrupción; prevenir e investigar los incumplimientos funcionales; prevenir e investigar los deberes de funcionario público, régimen de declaraciones juradas e incompatibilidades establecidas por la ley. Ya sabemos qué pasó con esa oficina, obviamente, después que comenzó la investigación de los funcionarios del Gobernador: al doctor Juez, en ese momento designado Fiscal Anticorrupción, lo echaron a los patadones junto a quienes trabajamos con él. Recuerdo perfectamente que me hurguetearon la cartera pensando que me llevaba algún expediente, que nos robábamos los expedientes por la cantidad de denuncias que recibíamos a diario debido a las irregularidades cometidas por los funcionarios del Gobernador De la Sota.

¿Por qué hago referencia a esto? Como recién lo manifesté, en la reunión de comisión cuando preguntamos sobre la igualdad del ejercicio de algunas funciones -en realidad, igualdad y verdad no las hay, esta oficina es un camuflaje, “buscar la verdad real, buscar la investigación de la violación a los deberes de los funcionarios públicos” ni por asomo-, el legislador Cid manifestó -y leyó- algunos de los incisos para determinar y concluir que nada tenía que ver la Oficina Anticorrupción con esta Oficina de Investigación Administrativa. Pero obviamente, en la lectura, puenteó algunos incisos. Es así que el artículo 51, que habla de las atribuciones de la Oficina Anticorrupción, en su inciso d) establece: “Investigar preliminarmente a los agentes a los que se les atribuye la comisión de actos de corrupción”. ¿Y cuál es la oficina que ustedes supuestamente están creando con este proyecto?, la de Investigación Administrativa de actos irregulares cometidos por los agentes.

¿Y qué dice el artículo 25 quinto del proyecto en tratamiento? Dice que entre las funciones y atribuciones que le corresponden a esta oficina de investigación administrativa, está la posibilidad de solicitar el cambio de lugar físico o la suspensión preventiva de los agentes responsables de las irregularidades, cuando a criterio de la oficina se entienda que esto es necesario para el esclarecimiento de los hechos motivo de la investigación.

¿Qué facultades tenía la Oficina Anticorrupción según el artículo 51, inciso d)? Recomendar la suspensión preventiva en la función o en el cargo que ejerce el agente, empleado o funcionario cuando su permanencia pudiera obstaculizar el curso de la investigación.

Obviamente que si algunos incisos no se leen, no es lo mismo; así es fácil. Somos ciegos para algunas cosas y para otras leemos con claridad.

Es así que allá quedó la Oficina Anticorrupción, las investigaciones a los funcionarios por los actos de corrupción cometidos durante el Gobierno de De la Sota; allá quedó esa Ley del Nuevo Estado, de la transparencia.

Ahora, con este proyecto, aparte de las funciones de investigación administrativa, se prevé que sea el cuerpo de abogados de la Fiscalía de Estado el que tenga facultad para instruir sumarios en esta ley que ustedes están modificando, volviendo a generar iguales competencias tanto para la Oficina de Investigación Administrativa como para el cuerpo de abogados. A alguna habrá que derogar, porque si el objetivo es unificar, esclarecer, decir la verdad real, pónganse de acuerdo sobre quién va a ejercer esa función, si la Oficina de Investigación Administrativa o como lo establece un artículo que ustedes no están derogando ni modificando, el 34 inciso d) de la Ley 7854; en definitiva, una oficina administrativa que obviamente va a generar conchabos políticos porque va a haber un jefe, administrativos, un cuerpo de abogados, ¿y con qué va a funcionar?, ¿van a traer empleados de otras reparticiones? No, no.

Finalmente, la creación de la Escuela de Abogados del Estado. Dice el artículo 25 sexto: "Organismo exclusivo y excluyente de capacitación y perfeccionamiento técnico de especialidad para los profesionales que desarrollen sus funciones en el Cuerpo de Abogados del Estado Provincial". La verdad, así como temblaba al saber que van a designar dos fiscales adjuntos y teniendo en cuenta lo que lleva hecho el fiscal actual, no quiero ni pensar lo que le van a enseñar al cuerpo de abogados. ¿A encubrir, ocultar hechos irregulares cometidos en el Gobierno de esta Provincia para que finalmente no tengan qué denunciar? No quiero ni pensarlo.

Por todos estos motivos, señor presidente, y atento a lo manifestado, claramente nos oponemos a este proyecto de ley en tratamiento.

Gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador De Loredó.

Sr. De Loredó.- Señor presidente: el zorro se paseó tranquilamente durante catorce años comiéndose las gallinas y hoy es necesario esconder las plumas.

El proyecto en tratamiento tiene -o pretende tener- dos trampas, que es muy habitual en la inteligencia parlamentaria del oficialismo. La primera es que discutamos las otras reformas que se proponen, como es la designación de un nuevo fiscal adjunto o la creación de una escuela de abogados cuando, prácticamente, han tenido que realizar esas reformas para tratar la única reforma que les interesa, la única por la cual se propone este proyecto de ley, que es la creación de esta oficina de "Investigaciones Administrativas". En esa trampa no vamos a caer, ni siquiera vamos a entrar en el debate de la oportunidad o no de una escuela de abogados a cargo de la Fiscalía de Estado de la Provincia.

La segunda trampa es incorporarnos a la discusión genuina y legítima del diseño institucional de la burocracia del Estado provincial. Ahí podría discutir con el legislador Cid sobre si se está de acuerdo con un proceso de centralización o descentralización de estas oficinas; él argumentará acerca de las cualidades de la centralización, entre otras cosas, que puede hacer una investigación administrativa una persona ajena a los investigados en la Administración —esto como punto a favor

de la centralización-; también argumentará a su favor sobre la uniformidad de criterios para el avance de las investigaciones, la centralización del marco normativo y la unificación de las estrategias de investigación.

Otros argumentarán sobre la descentralización de estas oficinas de investigación administrativa que tienen mucha más ductilidad, que tiene mucha más inmediatez en la investigación de irregularidades administrativas menores, el faltante de un insumo, de unas lapiceras, de una regla; otros opinarán -en favor de la descentralización- que tiene la posibilidad de ir acompañando las dinámicas, permanentemente, en movimiento de la estructura ministerial; en fin, la segunda trampa sería entrar en esa discusión del diseño institucional de estas oficinas.

¿Por qué digo que es una trampa? Voy a dar un argumento con el cual doy por terminada la discusión desde esa perspectiva. El Centro de Implementación de Políticas Públicas, CIPPEC, un organismo nacional que ha recibido muchos reconocimientos por sus investigaciones académicas -del cual no se puede señalar una politización en un sentido o en el otro-, cuando tuvo que hacer un diagnóstico sobre la legislación existente en la Provincia de Córdoba en materia de acceso a la información y regímenes de control administrativo, sacó esta conclusión y le puso números: del ciento por ciento de la legislación vigente en Córdoba, tiene implementación práctica solamente el 30 por ciento -no lo dice De Loredó, lo dice CIPPEC-, en esa investigación trabajó Lardone y Page y otros autores más que hicieron un relevamiento de toda la legislación en materia de acceso a la información y control administrativo de todas las provincias. La primera conclusión le daba muy bien a Córdoba, porque comparando legislaciones en muchos casos tenemos legislación de avanzada. La triste conclusión vino después, de esa legislación de avanzada – escuchaba a mi colega del Frente Cívico mencionar artículos de la Ley de Carta del Ciudadano, que tantos derechos propician- mucha está ahí, como letra muerta. Entonces, la segunda trampa es caer en la discusión del diseño institucional de esta oficina administrativa.

El único objetivo por el cual el oficialismo presenta este proyecto hoy en la Legislatura y propone la creación de una Oficina Administrativa para las investigaciones de irregularidades en el Estado provincial es para esconder las plumas de las gallinas que se comieron, señor presidente.

La incompatibilidad de esto, en cuanto a sus funciones y competencias, con una oficina actualmente vigente, como la Oficina Anticorrupción, creada también en la Ley de Carta del Ciudadano, es evidente. ¿Por qué no, señor presidente? Porque nosotros a este tema lo habíamos relevado antes y me había surgido una duda: “Che, ¿existirá todavía la Oficina Anticorrupción?” Sabemos que en términos prácticos no existe, fue la que ocupó Juez, y yo me jugaba la ficha de que existía en el plano legislativo. Fue fácil sacarnos la duda, consultamos la Ley de Carta del Ciudadano, los artículos 50, 51 y 52 son los tres artículos que disponen la organización de la Oficina Anticorrupción. Algunos colegas me discutían y me decían: “no, pero eso no existe más”; claro que existe, lo que resolvió el Gobierno fue esto: que no exista más en términos prácticos.

Por eso, lo primero que les pido es que tomen la decisión de derogar los artículos 50, 51 y 52; convoque a la Legislatura con un proyecto que diga: “El Gobierno

de la Provincia de Córdoba quiere derogar la Oficina Anticorrupción”, háganse cargo de lo que hacen, por lo menos tengan esa diligencia de hombres de Estado; si hay una legislación muerta porque no la quieren aplicar, porque la crearon para vender espejitos de colores a la ciudadanía, deroguen -es lo que corresponde-, los artículos 50, 51 y 52, y déjenos sin argumentos para decir que se superponen las funciones y las competencias de estas oficinas.

Daré unas breves explicaciones de por qué se superponen las competencias. El compañero Cid en la presidencia de la comisión decía: “no, porque esa Oficina Anticorrupción, justamente, investiga hechos de corrupción”. Primero, la corrupción como tal no es una tipología penal; segundo, esa oficina tampoco juzga hechos de corrupción, recaba los elementos para encontrar la existencia de un hecho delictivo y acudir al fuero correspondiente.

Otro gran problema: el fuero especial que ustedes han creado para garantizar la impunidad, el fuero especial en lo penal, económico y anticorrupción. En definitiva, es el camino institucional; es decir, nunca una Oficina Anticorrupción arranca una investigación a sabiendas de que existe un hecho de corrupción, porque para el caso tiene que remitir las actuaciones a la oficina jurisdiccional. El presidente de la comisión me dice: “pero este tipo de investigaciones administrativas por lo general se limita a incumplimiento de tareas de los agentes públicos”, falso, señor presidente.

La Ley de Procedimientos Administrativos -lo veo a Pihen, me imagino y tengo la certeza de que lo sabe- en los conflictos con el personal tiene una autoridad superior que tiene que ver con la Dirección de Personal, donde se tramitan los sumarios de los empleados. Entonces, vamos dejando de lado cuáles son las competencias. En definitiva, esta oficina lo que tiene que hacer es investigar, según el texto de la ley, todas aquellas otras anomalías que pueden ser por incumplimiento de la pauta en el monto y en el quantum de una compra directa, el exceso de una atribución, el abuso de autoridad de un funcionario o de un empleado; es decir, una serie de investigaciones que naturalmente pueden desembocar en la existencia de hechos de naturaleza delictiva de corrupción, que tienen que ser ofrecidos al poder jurisdiccional correspondiente. Eso es exactamente lo que tiene que hacer la Oficina Anticorrupción por ustedes creada.

No sé si decir algo pero, en verdad, decir que se fundamenta esto en el mayor volumen de tareas, porque puede haber muchos incumplimientos en procedimientos administrativos o anomalías administrativas en todo lo que hace a la actividad descentralizada del Estado, me parece que es una tomada de pelos a la ciudadanía, es directamente no tener cara -se lo digo con respeto, señor presidente. ¡Qué fácil resolver ese problema! ¿Saben cómo se evitarían todos esos incumplimientos a los que se debe abocar esta oficina administrativa centralizada que crean, y que le demanda tanta tarea a toda la administración descentralizada en la cual están las siete agencias, la empresa TECSA -veo al legislador Heredia y la recuerdo-, la empresa Caminos de las Sierras, toda la administración descentralizada no financiera? Sencillamente, se ahorrarían tanta tarea si también cumplieran con la ley y designaran a los síndicos que la oposición tiene por ley dispuesto a integrar estos organismos descentralizados.

Señor presidente: este legislador, en representación de este bloque, presentó un proyecto que lleva el número 11.962, a fines del año pasado, para revitalizar la Oficina Anticorrupción, en la expectativa, en la esperanza, en el anhelo no solamente de que se implemente y se ponga en funcionamiento una oficina que hoy existe, sino también de que se le dé ribetes institucionales para mejorar su diseño.

Entonces, proponemos que esa Oficina Anticorrupción dependa del Poder Legislativo, que el Fiscal dure en el cargo seis años, que no sean coherentes con el cargo del mandato del Gobernador, que sea elegido a través de un concurso público, que participen las instituciones académicas, el Colegio de Abogados; proponemos que haya una audiencia previa a su designación y aumentamos los requisitos. En definitiva, propiciamos una Oficina Anticorrupción como se sugiere por parte de todos los organismos que pugnan y velan por una mayor transparencia en el Estado.

Se comieron las gallinas durante años, el perro libre en el gallinero para comerse con absoluta libertad a las gallinas libres, como decía Raúl Alfonsín. Pasaron catorce años. Hay que empezar a emprolijar, muchachos, hay que empezar a esconder las plumas, hay que designar a los fiscales generales, que durante dos años nos “comimos” el mandato para que duren más tiempo. Ahora hay que empezar a ver cómo se designan nueve camaristas penales que esperan ser designados en el Consejo de la Magistratura. Hay que empezar a preparar la huida, señor presidente. Hay que empezar a garantizar la impunidad.

Por las razones argumentadas y conforme a la legislación vigente, el radicalismo no acompaña el proyecto en tratamiento.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador García Elorrio.

Sr. García Elorrio.- Señor presidente: tanto hablar de comida me ha dado hambre.

¿Por dónde empezamos? No se debió haber traído a debate el proyecto en tratamiento. Si hubieran consultado a un psicólogo o a un psiquiatra les hubiera dicho: “nunca le recuerden al herido el muerto porque lo daña”. Cuando traen a tratamiento esta dirección que investigará la corrupción en Córdoba, toda la mente de la oposición se fue a la Oficina Anticorrupción. O sea, hicimos una asociación en el acto.

Recuerdo –porque no en vano uno ha vivido sesenta años- un día en que el Gobernador de la Provincia, el doctor De la Sota, vestido con una guayabera –me acuerdo de cómo estaba vestido-, un fin de semana -me llamó la atención- convocó a los medios. A su derecha estaba parado el señor Luis Juez y otros ministros del Ejecutivo, y el señor Gobernador dijo: “Frente a calumnias e injurias que se levantan sobre nuestra gestión de gobierno, señor encargado de la Oficina Anticorrupción, le entrego la Provincia y demuéstrole a los cordobeses que aquí todo está bien”. Tengo grabada -el Gobernador tenía un pantalón beige y una guayabera- el impacto producido en la cara de Luis Juez, que expresaba: “¡Qué me estás pidiendo!”. Era evidente que el hombre se sorprendió como diciendo: “Me estás transfiriendo toda la carga de las cosas que acá se están haciendo bien, regular o mal”.

Luego, recuerdo a Luis Juez, tres meses después, pegando unos gritos en la puerta del Banco de la Provincia de Córdoba de la Avenida Vélez Sársfield. El hombre al cual le habían confiado la tarea de demostrarle a todos los cordobeses la pulcritud administrativa de Unión por Córdoba gritaba desaforado en la vía pública que lo habían echado de su despacho.

Después apareció una señorita –recuerdo que era más bien morena- para reemplazar a Luis Juez y, posteriormente, nos encontramos con un agujero negro, ya que nunca más volvimos a escuchar nada de nada. Y hoy –repito, nunca hay que hablarle al herido del muerto- aparece una reforma para transparentar los actos del Estado.

Si las cosas se hubieran hecho bien, Córdoba no debería hoy catorce veces más que la Provincia de Santa Fe o la Provincia de Mendoza. En tal sentido, creo que llegará un día que los cordobeses se van a enterar de esto, pero preferiría no estar acá presente cuando esto suceda. Pero, lo llamativo de esto es que sucede en administraciones del mismo signo político. ¿Cómo es posible que debamos catorce veces más que Santa Fe o Mendoza? En realidad, esto sucede porque no han funcionado debidamente los mecanismos de control o acá todo -el kilómetro de pavimento, la gasa, la vigilancia, etcétera- debe ser más caro.

También crean en la misma ley un Fuero Anticorrupción. Al respecto, les puedo asegurar que dicho fuero está en el Guinness de lo que no se debe hacer en materia de administración de justicia para investigar a los funcionarios; pero no todo va a ser siempre así. No hay crimen perfecto; los muertos hablan. Los muertos hablarán del estropicio que ha acontecido en esta Provincia. No va a haber malla metálica que pueda contener esto.

Hoy asistimos despavoridos a lo sucedido en el corazón de esta Capital en relación a una mesa de dinero de 400 millones de pesos, de la cual hasta hace poco el Director del Banco de la Provincia de Córdoba formaba parte.

A ver si nos entendemos, no todo es manejable, no podrán eternamente conducir la Fiscalía Anticorrupción, ni su silencio. No se puede. Han hecho demasiado daño. Catorce veces la deuda pública de Santa Fe es dejar sin futuro a miles de cordobeses.

Ya les he dicho a los señores legisladores del oficialismo –y con esto termino- que como los padres no debemos darles a los hijos todo lo que nos piden, nosotros –la mayoría de esta Legislatura- no debimos darle nunca al Gobernador lo que pedía, y no estaríamos en la situación en que estamos.

Miren qué flojo favor le han hecho al Gobernador de la Provincia, lo han transformado en el capitán de un barco; al no controlar lo que pasaba en esta Provincia, al permitir que el Presupuesto del año 2012 tuviera 1500 rectificaciones, al permitir que el Presupuesto del año 2013 tuviera 1300 rectificaciones, es decir, al funcionar sin Presupuesto, al funcionar como una auténtica monarquía, ustedes han puesto al Gobernador De la Sota en una triste situación: es ya, indefectiblemente, el capitán de un barco, y el hombre tiene la última opción: puede optar por ser el capitán del Titanic o el capitán del Costa Concordia, pero lo que no puede es tener un plan “c”,

porque con el nivel de deuda y de desbarajuste que ha habido en esta Provincia esto no tiene arreglo, señor presidente.

Nada más.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Pretto.

Sr. Pretto.- Gracias, señor presidente.

En verdad, habiendo escuchado a los legisladores preopinantes, no hay mucho para agregar, pero quiero destacar un par de cosas.

El legislador informante del oficialismo ha dicho cuáles son los objetivos de esta ley, están claros, los hemos podido leer. Lo primero que apareció es esta inconsistencia, esta falta de sentido al existir la Ley del Estado Nuevo, por la que se creó la Oficina Anticorrupción con similares funciones.

Están claros y son nobles los objetivos: mayor seguridad jurídica, profesionalizar las tareas de las áreas de Gobierno, uniformidad en los criterios que se desarrollan en las áreas de Gobierno, eficientizar el mayor flujo de tareas que tiene la Administración –o que va a tener, se supone, con esta iniciativa.

Lo primero que se me ocurre pensar es que la Provincia hace mucho tiempo que se debe un debate profundo acerca de la vigencia de las leyes. Hay un viejo proyecto sobre la simplificación legislativa que se presentó hace varios años aquí porque hay un montón de leyes vigentes que rigen sobre materias semejantes -o iguales en algunos casos.

Escuché al legislador De Loredó hablar sobre el informe del CIPPEC, que dice que del 100 por ciento de las leyes vigentes en Córdoba sólo se aplica el 30 por ciento; entonces, se me ocurrió pensar que sería oportuno volver a aquella idea de trabajar -todas las fuerzas políticas, los asesores y los técnicos de Legislativa y las distintas fuerzas políticas- en una verdadera simplificación legislativa para que, en definitiva, se sepa cuál es la ley vigente, cuál es la que rige, para que rija una sola ley, una ley estudiada y consensuada para las distintas áreas de Gobierno, obviamente en la Administración Pública, con las funciones que va a tener por esta ley y las creaciones de nuevos organismos como la Escuela de Abogados y, sobre todo, la Oficina de Investigación Administrativa.

Una de las funciones que va a tener –como dijo el legislador Cid y lo dice la ley- es que la Oficina Anticorrupción va a funcionar a pedido del responsable del área. Se me ocurre pensar: ¿cómo un responsable del área va a pedir la investigación administrativa de una compra mal hecha o alguna gestión administrativa que está violando una ley si, en definitiva, termina firmando él como responsable el acto administrativo que se va a ejecutar? Parecería sin sentido. Es decir, lo que él mismo va a materializar, si no está bien hecho o no lo materializa o antes de firmar pide la investigación, me parece inconsistente esta función.

Más allá de todo eso –que ya habló suficientemente-, en primer lugar pienso que la simplificación legislativa –reitero- es una tarea que nos debemos. En segundo lugar, si esta ley persigue la transparencia administrativa en todas las áreas del Gobierno, creo que la Ley del Nuevo Estado ha perdido la oportunidad de incorporar tecnología que hoy está a disposición de todos los Estados para transparentar las operaciones, tener parámetros objetivos de precios reales, evitar sobrecostos; un montón de beneficios que trae la tecnología como, por ejemplo, hacer compras con régimen establecido por ley a través de Internet, como lo tienen muchos Estados provinciales en Argentina.

Además, pensaba que hasta hace poco tiempo, pocos días –creo que el año pasado-, el Gobierno de la Provincia de Córdoba fue acreedor de un premio internacional por la transparencia administrativa en el modelo de gestión, cosa que nos cayó muy bien a todos los cordobeses. Escuchar que al Gobierno de la Provincia se lo premie a través de un organismo internacional que vela por los controles en la Administración Pública y que nuestro Gobierno sea acreedor de ese premio, obviamente, es un aliciente para las malas ondas y las malas noticias de la Administración Pública. Entonces digo, si la Provincia ha sido premiada por la transparencia en la gestión, por qué no reflotar el viejo criterio de la Ley del Nuevo Estado y poner, inclusive, en la Fiscalía Anticorrupción a un funcionario probo, que se lo pueda seleccionar –como se dijo acá- previas audiencias públicas, opiniones de organismos de control, universidades, ONG que velan por la transparencia y por la buena práctica y arte en la Administración Pública; por qué no entregar, previo a todo eso, esta Fiscalía a un funcionario de la oposición porque esa sería la forma de materializar el premio que tiene la Provincia por su transparencia y, además, mostrar que no hay nada que ocultar y que son reales los méritos que ha tenido para ser acreedora de ese premio.

Por todo lo que se ha dicho, y porque esta ley tiene una ley anterior que regula la misma materia y porque no se entiende cuál es la finalidad que se persigue pudiendo poner en práctica lo que ya está vigente, señor presidente, el bloque Unión Pro no va a acompañar esta iniciativa.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Birri.

Sr. Birri.- Señor presidente: la verdad es que no parecía que este proyecto, esta iniciativa que al principio aparentaba de cierta inocencia, poco pretenciosa, iba a generar todas estas disparadas de verdades por parte de los integrantes de los distintos bloques de la oposición que hicieron uso de la palabra.

Yo voy a manifestar algo un poco más académico, más breve, retomando, incluso, una discusión que tuvimos hace cuatro o cinco años vinculada a cuáles debían ser efectivamente los alcances que tuviera una Fiscalía de Estado; si mal no recuerdo, fue en el primer o segundo año del período anterior. Seguramente, el doctor Daniele –a quien no se le escapa nada- recordará esa discusión que tenía que ver,

precisamente, sobre cuál era la verdadera interpretación que tenía que tener el artículo 150 de la Constitución de la Provincia de Córdoba.

Yo digo ahora que es una buena oportunidad -no ésta que indudablemente ya está pasando, pero sí otras futuras- para actualizar la Ley Orgánica de la Fiscalía de Estado adaptándola a la dinámica moderna, dotándola de la independencia y la funcionalidad adecuada necesaria como verdadero órgano de control interno y defensa de la legalidad y del patrimonio provincial, como así lo establece la Constitución de la Provincia de Córdoba.

En lo personal considero que esta Ley Orgánica tiene un vicio de origen que, incluso, me veda, me impide entrar en las particularidades; por caso, en verdad no me resulta -a priori- inconveniente o innecesaria la formación de una escuela de abogados del Estado ya que muchas veces contrata servicios profesionales que dejan mucho que desear, por lo que una buena capacitación y especialización para que defiendan adecuadamente los intereses que son de todos los cordobeses hasta podría ser una medida atinada.

Pero decía que tiene un vicio de origen -que no es de ahora- que viene de la sanción propiamente dicha de la Ley Orgánica, donde coloca al Fiscal de Estado como asesor principal del Gobernador, que se repite gobierno tras gobierno desvirtuando, a mi juicio -en una lectura que reconozco que es estrictamente jurídica y académica-, esta figura institucional que es la del Fiscal de Estado prevista en el artículo 150 cuando se prescribe constitucionalmente junto con la Contaduría General.

Aquí, la semana pasada -si mal no recuerdo- se aprobó un proyecto que ratificaba dos decretos que cambian la estructura de la Ley Orgánica de Ministerios; en uno de ellos se establecía que la Fiscalía de Estado dependerá directamente o indirectamente del Poder Ejecutivo, lo que a mi juicio se encuentra colisionando con los fundamentos dados en el mensaje de elevación a esta Legislatura del proyecto que hoy está en tratamiento que, entre otras cosas, dice: "que se procura introducir a fin de dotar a dicho organismo de una disposición de los recursos humanos, los que exigen una permanente atención, no solo en los términos del artículo 150 de la Constitución, en cuanto a la Fiscalía de Estado como órgano constitucional del contralor del Poder Ejecutivo..." -hasta ahí le daría la derecha-, y también agrega. "...como asesor jurídico del Gobierno a través de todas las dependencias de éste". Entonces, me pregunto: ¿qué va a controlar la Fiscalía si depende del Poder Ejecutivo? ¿Cuál es el efectivo e independiente control que puede realizar en esas condiciones?

Por eso decía que, quizás, hubiera sido una buena oportunidad para tratar modificaciones, como lo hicimos en una discusión que quedó trunca hace 4 o 5 años, que hicieran compatible la nueva Ley Orgánica con la institución Fiscal de Estado, pues como su propio nombre lo dice es Fiscal del Estado, no es Fiscal del Gobierno y no es -o no debiera ser- Fiscal del Poder Ejecutivo.

En ese sentido, y como lo expresan algunas constituciones y leyes orgánicas de algunas provincias, creo que el Poder Ejecutivo y sus organismos podrían estar asesorados por un asesor de gobierno porque, si no, nos ponemos en una situación de difícil resolución cuando el Poder Ejecutivo sancione, por ejemplo -haciendo un ejercicio-, un decreto inconstitucional, una resolución ilegítima o dicte un acto administrativo viciado y el Fiscal de Estado deba acusar su inconstitucionalidad o

ilegitimidad; está claro, en este sentido, que existe una incompatibilidad porque naturalmente el Fiscal de Estado, en defensa del patrimonio provincial o de la legalidad, debiera cruzar –para hablar en términos de la jerga popular– un acto administrativo del gobierno. Una pregunta claramente, “cae de maduro”: ¿qué actitud tendría hoy siendo su asesor principal y qué actitud tendría cuando los intereses del Gobierno se enfrenten con los intereses del Estado?, ¿qué haría el Fiscal de Estado si cumple esa doble función?

La verdad es que creo –ya no hoy– que en un futuro inmediato sería oportuno que se revise la posibilidad de introducir la figura de Asesor de Gobierno, como sucede –repito– en algunas provincias.

En verdad, ahora debiera elevarle, señor presidente, una propuesta para que esta iniciativa pase a comisión, pero, como no tengo ninguna duda de que la votación me resultaría adversa, debo manifestar –y recomendar– el rechazo del proyecto en tratamiento.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (González).– Tiene la palabra el señor legislador Cid.

Sr. Cid.– Señor presidente: los legisladores se han tomado su debido tiempo y se han explayado extensamente sobre este tema y, para darle un orden a mi repuesta a todos los puntos que se han planteado, comenzaré por el último.

El legislador Birri planteó una crítica a esta ley –tal como lo hizo hace cinco años–, diciendo que “cómo un organismo puede ser, por un lado, de contralor y, por otro, de asesor o protector”; asimismo, dijo que “la ley está mal y hay que cambiarla porque cómo puede ser que al Fiscal lo designe el Poder Ejecutivo y aquél tenga, a su vez, la función de controlarlo”.

En lo filosófico, estoy a favor; aun así, lo que hay que cambiar no es la ley sino la Constitución de la Provincia de Córdoba, cuyo artículo 150 –cualquier ley que esté en su contra es inconstitucional, como lo es, por consiguiente, lo que pretende el legislador Birri– expresa: “El Fiscal de Estado tiene a su cargo el control de la legalidad administrativa del Estado... –precisamente el control que el legislador Birri cuestiona– ...y la defensa del patrimonio de la Provincia”. ¡Oh, sorpresa! ¿Qué hicieron aquí los convencionales constituyentes?, ¿generaron una contradicción? Luego, el legislador Birri dijo: ¿por qué el Poder Ejecutivo designa a quien debe controlarlo?”

Veamos qué hicieron los convencionales constituyentes con la segunda parte del artículo 150, que expresa: “Debe ser abogado con no menos de diez años de ejercicio. Es designado y removido por el Poder Ejecutivo y puede ser sometido a juicio político”. ¡Pucha, che! ¿Sabe qué, señor presidente? Si sancionamos una ley que contradiga la Constitución nos vamos a quedar cortos, sencillamente porque va a ser inconstitucional. Por lo tanto, el pedido del legislador Birri –que ya lo hizo como hace cinco años– choca de brues con el artículo 150 de la Constitución de la Provincia, que tiene una jerarquía superior a las demás normas.

Sr. Presidente (González).- Disculpe, legislador Cid; el legislador Birri le solicita una interrupción, ¿se la concede?

Sr. Cid.- Si tuvo tiempo de consultar la Constitución, sí.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Birri.

Sr. Birri.- Señor presidente: hay un viejo dicho popular –sabio como todos los refranes populares– que dice: “no hay peor sordo que el que no quiere oír”. A decir verdad, es obvio que el legislador Cid no ha querido escucharme, ya que rescaté, dentro de las funciones del Fiscal de Estado, precisamente la de control. Lo que creo está de más – y se da de bruces con el texto de la Constitución– es que, a su vez, sea asesor del Gobierno.

Esta es la diferencia que quiero dejar explicitada por si el legislador Cid –que tal vez no me escuchó bien– hizo una interpretación inadecuada de mis palabras.

Sr. Presidente (González).- Continúa con el uso de la palabra el legislador Cid.

Sr. Cid.- Señor presidente: ¿será tan amable de leer la parte final de la versión taquigráfica de la intervención anterior –no la última– del legislador Birri?

Sr. Presidente (González).- Legislador Cid, esa parte de la versión taquigráfica aún no está traducida.

Sr. Cid.- No importa; haciendo memoria –no estoy loco, como tampoco lo están mis compañeros de bancada, con quienes consulté al respecto–, recuerdo que el legislador Birri manifestó que estaba en desacuerdo con que pueda ser designado por el Poder Ejecutivo y removido por el mismo. Pero, bueno, lo vamos a dejar para la próxima sesión cuando esté transcrito; sería un lujo que lo pudiéramos leer y sacarnos todas las dudas, si no tendré que ir al médico.

Siguiendo hacia atrás, hizo uso de la palabra el legislador Pretto y habló de inconsistencias materiales –voy rápido con esto–, de transparencia en el control utilizando tecnologías y modelos de gestión; habló de varias cuestiones que tienen que ver con controlar con tecnología y pidió que se proponga a un funcionario de la oposición para ocupar este rol –el legislador me lo está ratificando con la cabeza–;

podría ser del PRO, que es de la oposición, o podría ser Ciro James o Montenegro que saben utilizar perfectamente la tecnología para controlar.

Antes del legislador Pretto habló el legislador Aurelio García Elorrio. Una cosa fantástica el doctor García Elorrio: le comento, señor presidente, que tuvimos tres comisiones, lo digo porque hace al tema ya que el doctor García Elorrio se fue por las ramas a tantos temas; yo voy a referirme a este tema y a las comisiones que lo trataron. En la primera comisión, entre los temas que tratamos estaba éste y el pliego de una funcionaria judicial que ¡vaya casualidad! tenía una impugnación. La convocamos a una entrevista para la semana siguiente y en esa misma reunión entregamos el proyecto, no para que fuera tratado en ese momento sino para que lo leyeran para la siguiente comisión, para que no digan que el oficialismo “mete” los proyectos que vienen del Ejecutivo “de pecho”, etcétera. Les dijimos a todos los miembros de la comisión: “Por favor, vayan a la Secretaría de Relatoría porque la impugnación es muy grande y no podemos hacerles copia a todos. Lean la impugnación así cuando entrevistemos a la postulante podemos preguntarle sobre la impugnación y ella responder. Además, lean el proyecto”.

Pasó una semana, vino la postulante y antes de que entrara a la entrevista pregunté: “¿Alguien leyó la impugnación?” Éramos muchos, yo la leí con la relatora, pero, al margen de la relatora y de mi caso, que soy el presidente, me dijeron que no y no sabían qué preguntarle a la postulante. Esto no sería nada sino que, además, tampoco habían leído bien el proyecto. Entonces, el legislador García Elorrio vuelve a decirme lo mismo que en la reunión anterior: “esto es lo mismo que la Fiscalía Anticorrupción”. Le digo; “Aurelio, ¿leíste la Ley de Fiscalía Anticorrupción? Me respondió que no. “Pero tuviste una semana”, le dije, y me respondió: “Vos la tenés ahí, me la podés leer”. Le contesté: “No, yo no soy tu lector de leyes. Yo fui, saqué fotocopias, la estudié, ahora vengo estudiado y he sacado la conclusión de que estas dos normas no son incompatibles”. Pero esto no es nada; hoy, después de la tercera comisión, donde le repetí lo mismo y se enojó, ¿sabe qué hizo, señor presidente, cuando terminó la tercera comisión? Le preguntó a la relatora cuál era el número de la Ley de Fiscalía Anticorrupción y si le podía conseguir una copia; hace de esto unos minutos.

Como dije, fueron tres comisiones. Entonces, ¿cuál es el nivel de seriedad? Por eso los discursos son tan vagos, se habla de la corrupción, etcétera, pero después de tres reuniones de comisión y finalizada la tercera recién se dignan a saber el número de la ley con la que deben comparar el proyecto que se estaba tratando. Esto es poco serio, señor presidente, no puedo discutir con alguien que no lee lo que debe discutir y que después de tres comisiones pregunta el número de una ley ya sancionada -que como legislador o ciudadano debería conocer- porque realmente es una discusión de sordos. Y no hablo más del tema, por lo menos de estos planteos.

García Elorrio, Pretto, Birri, Leiva y Rodrigo De Loredó, voy a alterar el orden: la legisladora Leiva comenzó hablando del patrimonio de la Provincia, de los gastos en publicidad, de los controles que debiera haber de esto. Naturalmente uno puede tener falta de memoria, también podríamos preguntarles a María Miranda o a José Balladore cómo se gastaban los fondos de publicidad de la Municipalidad, inauguraron una nueva forma de aporte a la prensa, que no era el aporte publicitario o la pauta de difusión, era la contratación de profesionales, de periodistas y de familiares en número

de decenas dentro de la Municipalidad y están los registros de periodistas contratados, además de familiares. Fue una nueva forma de llevarse bien con la prensa y de no poner pauta publicitaria.

También se dijo: “el Fiscal de Estado, que es como asesor, ¿cómo puede controlar si lo pone el Gobernador? ¿y quién lo puso a Medina a controlar la Municipalidad?, ¿era amigo del oficialismo provincial? No, era amigo de Juez. ¿Qué pasó con la CIGEKA de Rabat? ¿Qué pasó con todas las supuestas investigaciones que realizaban de manera transparente cuando les tocó ocupar un Poder Ejecutivo Municipal? Dijo, cuando estaba hablando la legisladora, que le comentó el legislador Birri: “Y será otro ‘ñoqui’ este Fiscal Adjunto”. ¿Y los 4.000 que nos dejaron en la Muni?, cuyo amigo -con el cual tomaban mate en la propaganda y que estaban juntos abrazados- salió meses después a decirle que su amigo, el tomador de mate en la propaganda, le había dejado 4.000 ñoquis, casi la mitad de la planta municipal.

Cuando hablaron de la Oficina Anticorrupción, contaron una anécdota personal, que le habían revisado, inclusive, la cartera a la legisladora Leiva, para ver que no se llevaran nada de la oficina. ¿Sabe lo que se llevaron de esa oficina? se llevaron los sueños de los cordobeses, de aquellos que habían pensado que se generaba una oficina para investigar la corrupción y ellos lo utilizaron como unidad básica para llegar a la intendencia de Córdoba y no para esclarecer todos los ilícitos que debieron haber estudiado cuando estuvieron en esa función. Eso es lo que hicieron con la Oficina Anticorrupción: un trampolín político, y que me lo desmientan.

Además, se habló, y esta es la parte técnica, del artículo 51, inciso e). Esto lo voy a adjuntar cuando hable de la parte técnica, a la cual hizo alusión muy preocupado Rodrigo De Loredó, mi amigo y correligionario, con las “plumas de las gallinas”. Se ve que hace mucho que no va al campo porque a las plumas las hacen almohadas o las queman. Debe comprar pollos de ciudad.

Estuvo muy correcto en analizar y separar las posibles ventajas de una descentralización, que una podría ser más inmediata, que la otra podría tener uniformidad: criterios y normas uniformes, personas que no pertenezcan al área investigada. Pero empezó a hablar acerca del objetivo que tenía esto, y que era impedir la posibilidad de una investigación transparente, de una legislación ya existente, y se dirigió al legislador Pihen nombrándole las direcciones de personal que se encontraban en los distintos ministerios para poder realizar las investigaciones en las distintas áreas.

Agregó que no existe el delito de corrupción -cosa que es cierto, la corrupción es una figura- pero sí un montón de tipos delictivos que encajarían dentro de un hecho de corrupción.

Ahora, yendo a los datos específicos, si la corrupción no existe, ¿por qué el 29 de marzo de 1996 se realizó la Convención Interamericana contra la Corrupción, que detalló una serie de tipos delictivos dentro de la Administración Pública y dio lugar a la adhesión de la República Argentina vía sanción de una Ley, la 24.759? Acá dice “corrupción”, no lo estoy inventando. Esta ley dice que se aprueba la Convención Interamericana contra la Corrupción firmada en la tercera sesión plenaria de la Organización de los Estados Americanos del día 4 de diciembre de 1996.



Es cierto que si bien la corrupción no es delito, detalla ciertos tipos delictivos: el requerimiento de la aceptación directa o indirecta por un funcionario público o una persona que ejerza funciones públicas de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas, ventajas para sí mismos o para otra persona o entidad a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas; también se refiere al ofrecimiento u otorgamiento a un funcionario a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones.

En función de esta ley, que detalla hechos que son tipos delictivos y forman parte de algo que la sociedad denomina corrupción, se sancionó la 8.835, que el legislador Aurelio García Elorrio no logró encontrar hasta después de la tercera comisión en que se trató.

Yo leí algunos tipos delictivos, todos los tipos delictivos son competencia de la Oficina Anticorrupción. En la ley que regula la Oficina de Investigación Administrativa, el único de los artículos que menciona un hecho de corrupción, el inciso 4) del artículo 25 quinto establece: “poner en conocimiento de la Procuración del Tesoro cualquier acto o hecho que pudiera constituir un ilícito y/o afectar el patrimonio del Estado”.

O sea que en el caso en que exista un delito o algún hecho de corrupción, no lo va a investigar la Oficina de Investigaciones Administrativas, sino que va a solicitar y enviar esas actuaciones a otro organismo, porque no creo que la Oficina Anticorrupción se tenga que dedicar a si una persona llegó tarde o no a su trabajo y por qué; si abandonó el puesto de trabajo cuánto tiempo y por qué; si rompió un inmueble, por qué motivo y cuánto cuesta el arreglo; eso no es objeto de la Oficina Anticorrupción pero sí objeto de investigaciones administrativas.

Por su intermedio le digo a la legisladora Leiva que aquí está la parte que no leyó, la última parte del artículo al que hizo alusión. Se lo voy diciendo para que los asesores que la están ayudando le consigan el texto normativo así lo lee luego de que hable yo.

Finalmente, después de las atribuciones de la Oficina Anticorrupción, dice: “Las atribuciones contempladas en los incisos b) y d) deberán ejercerse en el marco de las previsiones contenidas en la Ley 7233”. La Ley 7233, en el artículo 76, dice: “La investigación y sumario administrativo tendrán por objeto esclarecer los hechos que le dieran origen, determinar la autoría de los agentes dependientes de la Administración Pública y eventualmente de terceros involucrados, cómplices o encubridores y las consiguientes corresponsabilidades que les cupieren, debiendo sustanciarlas por resolución dictada por autoridad competente”.

El artículo 76, que reglamenta la ley antes mencionada en su punto número uno, Decreto 1080 del año 1986, reglamentario de la 7233, dice: “La investigación administrativa procederá como condición previa a las sustanciaciones sumarias y tendrá como finalidad producir los elementos de convicción que funden la instrucción sumarial, como así también la individualización de el o los presuntos responsables, debiendo ser ordenada por resolución del director de la repartición –al cual hiciera alusión la legisladora cuando se nombró a nuestro compañero Pihen- titular del organismo descentralizado, autoridad de nivel equivalente, secretario, subsecretario o ministro”.

¿Qué estamos diciendo, señor presidente? Que este organismo va a concentrar estas facultades en las cuales no se está hablando de un delito en la normativa de la Fiscalía Anticorrupción, sea por pedido de algunas de estas autoridades que son jefes de las áreas, o de oficio en el caso que se lo pida el Fiscal de Estado y el responsable del área entienda que no debe llevarse adelante la investigación e igualmente se llevará adelante, y no los delitos que detalla la Oficina Anticorrupción, que son los que denominamos hechos de corrupción. Por lo tanto, señor presidente, nosotros entendemos que están perfectamente separadas las tipologías que por un lado hacen a faltas administrativas y por el otro a delitos de corrupción que deben ser abordadas por distintos organismos.

Finalmente, señor presidente, el hecho del funcionamiento o no de la Oficina Anticorrupción o del análisis de la realidad de la Provincia o de los números y sus finanzas no forman parte de esta discusión. Sí forma parte de la misma el proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo y si esta norma es o no incompatible con otra ya existente de un organismo que tiene prioridad en el tiempo de su formación.

Habiendo sido aclarado que no son incompatibles y que cada una tiene una competencia de funcionamiento diferente, las otras especulaciones acerca de si funciona o no y de quién se encarga de la Oficina Anticorrupción deberán ser motivo, en todo caso, de otro proyecto de ley o de un pedido de informes por parte de la oposición ya que no tiene nada que ver con la discusión que hoy nos atañe.

Por lo expresado, señor presidente, es que solicito y mociono que se vote el presente proyecto.

Sr. Presidente (González).- Antes de continuar con el debate quiero informar a los señores legisladores que se encuentran en el recinto el señor Intendente de Corralito, Juan Scotto, y el señor Intendente de Colonia Almada, José Peralta, a quienes agradecemos su presencia.

Tiene la palabra la señora legisladora Leiva.

Sra. Leiva.- Señor presidente: después de escuchar al legislador Cid con tanta precisión, con tanto tecnicismo jurídico acerca de lo que entiende él es un hecho de corrupción, deberían proponerlo como fiscal en la Oficina Anticorrupción y se evitan este problema. La verdad es que a ustedes ...

Sr. Presidente (González).- Perdón, señora legisladora, el legislador Cid le solicita una interrupción.

Sra. Leiva.- No.

Sr. Cid.- No, hice moción de que se vote.

Sr. Presidente (González).- Había dos pedidos de palabra anteriores, que son el de la legisladora Leiva y el del legislador García Elorrio.

Continúe en el uso de la palabra legisladora Leiva.

Sra. Leiva.- El único objetivo de ellos es crear una oficinita que investigue –como ayer explicaban en la Comisión de Asuntos Constitucionales- administrativamente a aquel empleado que se roba un poco de azúcar, y yo le agrego: al empleado administrativo que fue a la cocina y se robó un saquito de té o de mate cocido. Eso es lo que va a hacer esta Oficina de Investigación Administrativa que están creando, va a investigar esos robos, esas irregularidades administrativas. Es una burla. La Oficina Anticorrupción está creada ¿por qué no la ponen en funcionamiento?

¿Ellos nos acusan de que nos llevamos los sueños? Es muy gracioso. A los sueños se los llevaron ustedes. La deuda de la Provincia es de 30 mil millones de pesos.

¿Saben lo que le decía el Gobernador al Fiscal Anticorrupción designado en ese momento? “Luisito, hacé la plancha; ¿qué estás haciendo?; acá no estás para investigarnos a nosotros”, y ¡oh! casualidad, después de esas manifestaciones no teníamos insumos en la oficina -no teníamos máquina, no teníamos papel-, no nos mandaban nada. Ustedes tienen el arte de crear permanentemente cargos, como lo están creando con esta ley -dirección, direcciones generales, fiscalías adjuntas- y como lo prevé el proyecto de policías de antinarcotráfico.

¿Saben qué hicieron? Como no le hizo caso al Gobernador de “hacer la plancha” y no investigar la cantidad de denuncias que a diario hacían los ciudadanos en contra de los funcionarios de esta Provincia por hechos de corrupción, lo bajaron del cargo y de secretario lo pasaron a director. Eso hicieron ustedes y eso es lo que están acostumbrados a hacer cuando alguien osa investigar a alguno de sus funcionarios. Finalmente lo echaron a los patadones.

El sueño de los cordobeses ¿nos lo llevamos nosotros?, el sueño de los cordobeses ¿lo echamos por tierra nosotros? Lo echaron por tierra ustedes en estos catorce años.

Ley del Estado, Estado ausente, ¿nadie le dijo al Gobernador, cuando se juntaron las esposas de los policías, incluso el Fiscal que asesora al Gobernador: “Gallego” -porque supongo que deben tener esa relación- o “Señor Gobernador, volvete de viaje, de vacaciones, acá se viene una brava, están las mujeres reclamando por sus esposos”, ¿nadie le dijo mientras él estaba en el Caribe, en el aeropuerto, en Panamá, por teléfono: “volvete, cada vez se pone peor”. Saquearon la Provincia, pero los sueños nos los llevamos nosotros. Ustedes se llevaron los sueños de los ciudadanos de esta Provincia; el sueño de dormir en paz y tranquilidad, entraron a sus casas y los saquearon sus vecinos, pero los sueños nos los llevamos nosotros. Ley de

Nuevo Estado, derecho a la educación; hasta el año pasado 83 escuelas contenedores, pero los sueños nos los llevamos nosotros.

La comida que le daban a los alumnos en el colegio -lo planteó el legislador, compañero de mi bancada- en mal estado; les daban algo que decían que les daban, ¡y vaya a saber!, era pollo pero, en realidad, no era pollo, ¡vaya a saber lo que les daban! Pero los sueños los llevábamos nosotros.

Pregúntele a los que salieron sorteados con el Plan Hogar Clase Media, ¡ni un ladrillo les tiraron por la cabeza!, ¡ni una bolsa de cemento les dieron! Y los sueños nos los llevamos nosotros.

¡Qué hablar! Terminal de Ómnibus, ¡se llueve por todos lados! Gasto irreparable, 140 millones de pesos. ¡Y el faro! ¿Para qué queremos un faro? Para los barcos que giran alrededor del laguito del parque.

El Hospital de Bell Ville, el estado que mi compañera Liliana Montero denunció en que se encontraban los internados, ¡pero los sueños nos los llevamos nosotros!

Y sigo, Carnaval Cuartetero, ¡se llevaron los sueños de los cordobeses! Hasta la fecha no tenemos el informe de lo gastado, pero aún seguían las 83 escuelas contenedores. Los quiero ver a los hijos de ustedes metidos en esas covachas con calores terribles en verano y con fríos imposibles de tolerar; quisiera ver a alguno de sus hijos; ¿es que acaso un gitano le dijo, señor Gobernador, no podemos tener estos chicos en estas escuelas? Pero gastamos 900 millones en publicidad, pero gastamos en una Terminal mal hecha, pero gastamos en un faro, y tenemos 83 escuelas -hasta el año pasado- contenedores. ¡No tienen vergüenza! Pero los sueños nos los llevamos nosotros.

Ni qué decir de la Central Pilar: 1100 millones de dólares, pero por lo que sé yo, mi vieja y todos -digo mi vieja, por la edad-, se le cortaba la luz a cada rato, disparaba mi vieja con la carne y la leche para la casa de la hermana, ni qué decir de aquellas familias que tienen niños pequeños; pero los sueños nos los llevamos nosotros.

-Manifestaciones desde las bancas.

El legislador Cid no quiere que hable. Lo lamento, él me da el pie y ahora me tendrá que escuchar; capaz que si se callaba terminábamos ahí, pero ahora me tendrá que escuchar.

Hizo referencia -porque él habla en plural- a que con motivo del tratamiento de un pliego en la Comisión de Asuntos Constitucionales de una postulante que tiene una denuncia, debido a la enorme implicancia de esa denuncia, solicitó que lo fuéramos a ver. Primero, planteó en la comisión qué opinábamos, si la entrevistamos o no, a lo cual le manifesté que es la obligación de la comisión entrevistarla. "No, pero yo quiero saber la opinión". ¿Por qué te tengo que dar mi opinión? Te estoy adelantando qué voy a hacer con el pliego, si lo acompaño o no; no tengo por qué adelantarte,

previamente debo entrevistarla. Es obligación de la Comisión de Asuntos Constitucionales entrevistarla, pues entrevistémola y después veremos qué hacemos con la denuncia, cómo la valoramos cada uno de los integrantes de la comisión y si acompañamos o no el pliego, a lo que él dijo: "Bueno, vayan a verlo antes".

¿Desde cuándo le tengo que hacer caso al legislador Cid de ver antes o no algo que después voy a valorar si lo voy a acompañar o no? ¿Tengo que preguntarle al legislador Cid qué quiere que le pregunte al postulante en la Comisión de Asuntos Constitucionales? En verdad, que semejante sueño es el de él de creer que le voy a hacer caso de ir cuando a él se le ocurra!

Además, le dije: "Danos tiempo después de la entrevista y antes del tratamiento en la sesión", porque no se iba a tratar hoy sino que iba a pasar para el miércoles que viene. Allí sí puede ser, si se me da la gana, voy a ver el expediente.

Mire, señor presidente, la verdad es que es una osadía del legislador Cid plantear que los sueños de los cordobeses nos los llevamos nosotros. Los sueños de los cordobeses los ha terminado y aniquilado el Gobierno de la Provincia.

Gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador García Elorrio.

Sr. García Elorrio.- Señor presidente: en verdad, todo este problema en realidad lo armó Cid. (Risas).

Fíjese la capacidad que tiene para hacer de las cosas simples inmensos problemas.

Ayer, en la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el legislador Cid tuvo dos intervenciones que, en realidad, explican que para usted va a ser una fuente de conflictos permanentes este nuevo vocero que han tomado para defender lo indefendible. Les va a crear uno por semana, si no, mire lo que hizo. La primera que hizo fue cuando dijo: "Che, muchachos –porque él habla así-: no hay que ver todas esas cosas que plantean los abogados, las quejas contra los funcionarios", y lo miramos así, ¿cómo no hay que ver lo que dice la gente cuando impugna a un funcionario? para colmo está grabado –algo ha referido la legisladora.

Pero como varios -correctivamente, ya que siempre lo tratamos de contener de alguna forma- le dijimos: "Cid: eso no puede ser".

Fíjese la que hizo: "No, a eso no hay que verlo. Ya vienen los abogados, si no siempre vamos a tener problemas con los pliegos". Fíjense el concepto del nuevo miembro del Jurado de Enjuiciamiento de esta Provincia.

Pero no se quedó con eso sino que nos aconsejaba que nos atuviéramos a las constancias del expediente porque allí estaban ya algunas respuestas que habían dado los organismos de control que habían investigado previamente esa denuncia. ¿Y qué hicimos? Agarramos y vimos los pliegos, y estaban las respuestas que habían

dado los organismos de control que habían intervenido en las denuncias que esa señora había hecho. Además, le preguntamos a la señora, precisamente, sobre este tema, y ahora viene con esta historia más propia del cotilleo de esos programas de televisión de las tres de la tarde, como “Intrusos”.

Estamos hablando de una provincia que debe catorce veces la deuda de Santa Fe, y el legislador Cid lo defiende al oficialismo de semejante dislate con algo más propio del cotilleo de “Intrusos” que de los problemas reales que tiene la Provincia de Córdoba.

Ahora bien, la segunda que hizo –y ésta es realmente para el Guinness- armó todo este lío que hoy nos ha llevado tres o cuatro horas de sesión -esto viene bien para que a través de los heridos recordemos a los muertos. ¿Sabe lo que hizo el legislador Cid cuando se le preguntó -el hombre asume el rol de “El Peronismo que Viene”, que a veces parece peor que el que se va; además, el hombre asume una posición doctoral: “Oye Cid, ¿qué es de la vida de la Oficina Anticorrupción –la de Luisito Juez-?” Nos contestó: “de eso no sé nada”. Éste es el hombre que habla de responsabilidad.

Le sugiero al oficialismo...

Sr. Presidente (González).- El legislador Cid le solicita una interrupción, ¿se la concede?

Sr. García Elorrio.- No, señor presidente.

Sr. Presidente (González).- No se la concede, legislador Cid.

Continúa con el uso de la palabra el legislador García Elorrio.

Sr. García Elorrio.- Señor presidente: para que esta Cámara no entre en debates estériles, le deben hacer conocer de alguna forma al legislador Cid la inmensa responsabilidad que tiene.

¿Saben por qué esto ha venido muy bien? Porque este señor Cid es quien va a presidir nada más ni nada menos que la Comisión de Asuntos Constitucionales en los días que se avecinan, y viéndole al hombre algunas “particularidades” lo vamos a seguir muy atentamente.

Nada más.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Cid.

Sr. Cid.- Señor presidente: no dije que no sabía qué había pasado con la oficina; simplemente pregunté si ese tema se encontraba en el temario. Al no estar en el temario no me vi en la obligación de responder qué había ocurrido con la Oficina Anticorrupción.

Le agradezco al legislador...

-Manifestaciones en las bancas de la oposición.

Sr. Presidente (González).- Continúe con el uso de la palabra, legislador Cid.

Sr. Cid.- Señor presidente: voy a pedir que se vote como han solicitado los legisladores.

El legislador García Elorrio ha terminado de hacer uso de la palabra y siguiendo su consejo de la época de Dalmacio Vélez Funes -y yo como su alumno-, solicito que se cierre el debate y pasemos a votación.

Sr. Presidente (González).- No habiendo ningún otro orador anotado, voy a poner en consideración en general el proyecto 13299/E/14, tal como fuera despachado por las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.

A los efectos de la votación en particular, se hará por número de artículo.

-Se vota y aprueban los artículos 1º al 12 inclusive.

Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 13 de forma, queda aprobado el proyecto en general y en particular.

Se comunicará al Poder Ejecutivo.

Sr. Presidente (González).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, y si no hay objeción en aplicar el artículo 157 del Reglamento Interno, vamos a dar tratamiento sin constituir la Cámara en estado de comisión a los siguientes proyectos: 13405, 13406, 13410, 13417, 13418, 13419, 13422, 13423, 13430, 13432, 13441 y 13442/L/14, sometiéndolos a votación conforme al texto acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria.

En consideración la aprobación de los proyectos enumerados.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).-Aprobados.

Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente 13296/E/14, con una moción de preferencia que será leída a continuación.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

Córdoba, 19 de febrero de 2014.

A la Presidencia del Poder Legislativo

De mi consideración:

Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 125 del Reglamento Interno, moción de preferencia, para la 5º sesión ordinaria del 136º período legislativo, para el expediente 13296/E/14, proyecto de ley iniciado por el Poder Ejecutivo provincial estableciendo mecanismos de cesantía y exoneración del personal del Sistema Provincial de Seguridad Pública en casos de inconducta, insubordinación o abandono del servicio.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Sergio Busso

Legislador provincial

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de preferencia leída por Secretaría.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

– Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.

Se incorpora al Orden del Día de la 5º sesión ordinaria.

No habiendo más asuntos que tratar, invito al legislador Carlos Felpeto a arriar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.

– Así se hace.

Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.

– Es la hora 19 y 22.

Dra. Silvana Sabatini

Directora del Cuerpo de Taquígrafos